



29 de noviembre de 2007

Actores sociales vieron por televisión acuerdo educacional cosmético de los partidos políticos

La investidura del salón Montt Varas y la solemnidad del acto fueron la escenografía para la jefa de Estado, la ministra de Educación y los presidentes de los partidos. No así para los estudiantes secundarios, los verdaderos responsables de que hoy Chile discuta un tema que antes de su entrada en escena no estaba en la agenda de nadie.

“Los pilares de la Loce se mantienen intactos”. Esta declaración del saliente presidente de la Fech, Giorgio Boccardo, sintetiza a cabalidad el pensamiento expresado por profesores, estudiantes universitarios y secundarios, codocentes, padres y apoderados, frente al acuerdo político educacional suscrito entre el Gobierno y la totalidad de los partidos con representación parlamentaria, del oficialismo y de la oposición de derecha.

El protocolo, suscrito solemnemente el salón Montt Varas, no sólo ha sido criticado por sus contenidos. En el plano de la escenificación, ha transmitido al país el peso inmemorial de las instituciones de la República y ha agudizado la distancia entre el mundo social y el de los partidos políticos. Esto llevó a que el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, denunciara “un acuerdo entre cuatro paredes” y “que apenas unas horas antes de que se firmara nos hicieron llegar una minuta del Mineduc”.

Hay que contextualizar esta decisión en una falta de apego entre la ciudadanía y los partidos que no sólo es retórica. De acuerdo la ya tradicional y recientemente publicada Encuesta Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales, en su tercera versión del 2007, un 61 % de la población opina no sentirse identificada con ninguno de los partidos políticos existentes en el país. Esta cifra ha ido *in crescendo*, pues en los años 2005 y 2006 arrojó cifras del 48 y el 53, respectivamente. Una encuesta del CEP de diciembre de 2006, arroja una respuesta de un 46 % respecto a la misma pregunta.

Pero hay que decir también, que los pingüinos demostraron que este desapego no implica falta de interés en participar en los grandes debates del país. En la hebra inicial de este proceso, los estudiantes secundarios paralizaron al país y remecieron la modorra transicional en la que todo se pactaba por arriba y nadie incidía desde abajo. Llegaron a ser un millón de liceanos en toma y acapararon la atención no sólo del país, sino que de muchos lugares del mundo. Pusieron en jaque al gobierno y sumergieron a la presidenta Bachelet en una penumbra que la ha acompañado desde entonces. La crisis política de aquella vez fue resuelta con la creación de una comisión asesora presidencial, en la que los actores sociales



participaron como parte de un grupo de 84 delegados, la cual durante seis meses trabajó en la elaboración de un documento de casi 250 páginas y que entregó en diciembre del año pasado sus conclusiones a la presidenta Bachelet. ¿Fue esa instancia, cómo se dijo, un ejemplo de participación o un mero artefacto para desactivar una bomba política que amenazaba con explotar en las manos del Gobierno?

A la luz de la incidencia real que tuvo esa instancia, el tesorero del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, afirma que “la primera inquietud que surge tiene relación con la movida del Gobierno de propiciar una alianza política que desconoció la labor realizada por los académicos, alumnos, educadores y apoderados, durante los seis meses que transcurrió el trabajo del Consejo”.

“Lamentablemente –agregó– el Gobierno insistió en reiniciar nuevamente un debate, cuyo diagnóstico está contenido en varios documentos previos que dan cuenta de las necesidades y los aspectos que se tienen que abordar en el corto y largo plazo, respecto a temas como la institucionalidad, la selección y la calidad”.

Los líderes de la insurrección pingüina, más allá de sus diferencias de perfil y de visiones, fueron unánimes en cuestionar la falta de legitimidad y el alcance famélico del acuerdo. María Huerta, quien fuera presidenta del centro de alumnos del Instituto Superior de Comercio, dijo, refiriéndose a al Gobierno, que “si ellos se sienten felices con los cambios que están haciendo, allá ellos. Si a mí me preguntan y a cualquier estudiante secundario le preguntas, no van a estar contentos. Ni el Gobierno, ni los parlamentarios, ni los acuerdos le han sabido responder al movimiento secundario”.

Similar opinión tiene Luis Toro, ex líder de los estudiantes de la Región de Valparaíso, quien cree que la voluntad política del oficialismo y la Alianza puede medirse al constatar que el protocolo “no abordó temas como el financiamiento compartido y la municipalización, método que comenzó a regir desde los inicios de la década de los 80` y que hoy pone en jaque la continuidad del modelo público de enseñanza”.

Los actores consultados coincidieron en las lecciones que entrega este proceso. La primera es que sólo la movilización garantiza avances en el debate educativo, puesto que hasta el momento las vías política y la parlamentaria han resultado ineficaces para representar las aspiraciones del mundo social. La segunda es la agudización de las desconfianzas hacia el Gobierno y sus espacios de participación. Una consecuencia esperable de esto es que, en los próximos días, al menos la Fech y eventualmente la Confech decidan su marginación del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, que en estos momentos se encuentra en la última etapa de su trabajo.



Por tanto, luego de presenciar el derrotero seguido por el debate educacional, los actores sociales vinculados a la educación están buscando maneras de rearticularse. Entienden que, luego de la criminalización y la represión sufridas por el movimiento secundario durante este año, deben tratar de rearticularse para enfrentar con mayor coordinación un 2008 en el cual seguirán decidiéndose cuestiones fundamentales. En los próximos días realizarán un primer encuentro en la Fech, en el que recibirán un compromiso de apoyo de algunos actores políticos parlamentarios que disintieron del acuerdo de los partidos. Esperan que de este modo se entienda que hay dos caminos: el oficial con sus lógicas de perpetuación del sistema y el de la articulación social, el cual esperan haga justicia a la demanda fundacional del movimiento estudiantil.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas
“El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública”